

Imprimir

El 10 de enero Nicolás Maduro jura de nuevo su cargo como presidente de la hermana república de Venezuela. Pero Washington no está dispuesto a que lo haga en paz. La administración de Biden sigue sin reconocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en las que él obtuvo el 51.9% de los votos y Edmundo González, el candidato de la oposición, 43,18% de los mismos. Y apoya, bajo cuerda como es su estilo, el plan de que González, actualmente exiliado en Madrid, regrese a Venezuela y ese mismo día se posesione como nuevo presidente del país. En una operación que vendría a ser la continuación de la protagonizada por el líder de la extrema derecha Juan Guaidó en enero de 2019, cuando se autoproclamó presidente de la república en un parque de Caracas y delante de un centenar de exaltados partidarios.

El plan es que en esta ocasión González lo haga de una manera más formal. La ceremonia no se realizaría en Caracas sino en Maracaibo, capital del estado de Zulia, cuyo gobernador es militante de la oposición, al igual que lo son los diputados de la oposición, que se reunirían proclamando que ellos son la legítima Asamblea Nacional y no la que efectivamente fue elegida en los comicios del 28 de julio pasado. Las consecuencias inmediatas de lo que vendría después son previsibles. Si los jueces y la policía venezolana arrestan a estos diputados acusándolos de sediciosos, los grupos de choque de la oposición (las llamadas “guarimbas”) lanzarían a la calle a promover disturbios, destruir edificios públicos, asaltar sedes del partido socialista venezolano y golpear e incluso matar a militantes del mismo, tal y como lo hicieron en las 72 horas siguientes a las elecciones del pasado 28 de julio. Actos de violencia que los medios hegemónicos del Occidente colectivo atribuirían, como es enteramente previsible dado su historial al respecto, a las “fuerzas represivas del régimen”.

Aportando así más “pruebas” al abultado expediente incoado contra el gobierno venezolano por la misma Corte Penal Internacional que tardó seis meses para hacer efectiva la orden de captura contra Benjamín Netanyahu y Yoav Galant, su ex ministro de defensa, por “crímenes de guerra” cometidos en Gaza, emitida por su fiscal general. Orden que ni el propio Biden ni los gobiernos de Alemania a Francia están dispuestos a cumplir, tal y como lo han declarado públicamente. Por su parte, el gobierno de Canadá, encabezado por el liberal Justin Trudeau, adelantó a su contribución al éxito de la operación sediciosa del próximo 10 de enero,

sancionando (sic) a cinco de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia que dio por válidas las actas electorales en las que se basó el Consejo Nacional Electoral del hermano país para declarar ganador a Nicolas Maduro de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Y desde luego hay que dar por hecho que tanto Washington como la Unión Europea y la probablemente mayoría de los gobiernos de América Latina reconocerán igualmente a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela. Ya lo hicieron con Guaidó y no veo por qué no lo van a hacer con González. Está en su ADN, por decirlo de alguna manera. Las excepciones van a ser México y Brasil, cuyos gobiernos adhieren firmemente al principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países y reconocen en consecuencia los resultados electorales dados por las legítimas autoridades venezolanas.

Hay sin embargo una parte de este plan que no ha sido desvelado aún y que podría ser el más ominoso. Tiene que ver, tanto con el éxito que se han apuntado Washington e Israel con el derrocamiento del presidente de Siria, Bachir al-Assad por milicias yihadistas, como por el hecho de que el 20 de enero toma posesión de la presidencia de Estados Unidos Donald J. Trump. No olvidemos que él fue quien aplicó la primera ronda de sanciones (sic) a Venezuela que arruinó la industria petrolera del país hermano e infringió gravísimos daños a su economía y a su sociedad. Ni olvidemos tampoco que él fue quien criticó a Biden por llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro que permitieron volver a operar en Venezuela a las petroleras norteamericanas a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones. Entonces dijo: "Biden le está comprando a Maduro un petróleo que es nuestro".

Dados estos antecedentes, no puede descartarse del todo que la anunciada toma de posesión de Edmundo González y los violentos disturbios que vendrán a continuación, sean el pretexto para un desembarco de marines en el estado de Zulia, secundado o anticipado por paramilitares colombianos, en aplicación de una estrategia como la ya probada por Washington en el Medio Oriente. A mí, desde luego, me parece una operación delirante, que sumiría a Venezuela en una guerra civil que terminaría por destruirla. Y que no nos dejaría a nosotros indemnes. Pero es tan alta la fiebre belicista que hoy padece Washington que no cabe, insisto, descartarla. No olviden que Chief Commander va ser entonces Donald Trump.

El 10 de enero en Venezuela es una fecha crucial

Carlos Jiménez

Foto tomada de: Nicolas Maduro en X